

Imprimir

El gobierno acaba de aprobar el documento Conpes no. 4023, *Política para la Reactivación, la Repotenciación y el Crecimiento Sostenible e Incluyente: Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia*. La principal característica de este plan es su continuidad frente a las políticas anteriores. Es decir, no marca un punto de inflexión. Se mantienen las estrategias previas al Covid-19, aunque algunos énfasis se modifican. Para el gobierno la crisis actual no obliga a realizar cambios sustantivos.

1. Continuidad

La continuidad se refleja en los objetivos de reactivación en el *corto* y en el *largo* plazo. El objetivo de corto plazo es "... volver rápidamente a la senda de crecimiento en la que estaba el país antes del Covid-19". Se acepta, entonces, que la economía colombiana iba por un buen camino, y que el propósito de la reactivación es volver a la senda anterior. El siguiente texto es claro:

"El componente de corto plazo busca que la economía del país retorne rápidamente a la senda de crecimiento y progreso social que estaba recorriendo cuando recibió el choque del Covid-19, así como contrarrestar las problemáticas que fueron creadas o profundizadas por la pandemia y las medidas de contención del Gobierno" (p. 58, subrayado añadido).

De acuerdo con el gobierno, el país venía bien en materia económica y social. Por tanto, la reactivación tiene el objetivo de recuperar el camino anterior. Y, entonces, no es necesario hacer cambios sustantivos.

Pero antes de la pandemia ya se estaban presentando problemas estructurales, que el propio gobierno reconoce. Acepta que "... la canasta exportadora está concentrada en productos minero-energéticos; en 2019 representaron el 61% de las exportaciones, y su aporte al crecimiento económico del país fue solo de un 3,3%" (p. 93). A pesar de que este diagnóstico es adecuado, el plan de reactivación no ofrece alternativas que lleven a modificar la matriz energética. No obstante, las declaraciones a favor de la *bioeconomía*, se continuará con la

explotación de petróleo y minerales. Y el último paso en esta dirección es la consolidación del fracking.

El gobierno es ciego frente al panorama internacional. Cada vez con mayor claridad, disminuye la demanda de combustibles sucios. La crisis de Cerrejón y Prodeco apenas es una expresión del cambio sustantivo que se está presentando a nivel mundial. Y desconociendo este hecho, en el programa de reactivación se espera que el déficit fiscal en el 2030 sea de -1,0%, y para poder lograrlo se hacen estimaciones optimistas del precio del petróleo, como si no fuera a pasar nada con este mercado. A partir de 2023 se espera que el precio del petróleo tenga una pendiente positiva, y en el 2030 llegue a 76,3 dólares barril. Tal supuesto no tiene ninguna justificación. Este imaginario únicamente sirve para que el gobierno pueda soñar cierres fiscales.

A pesar de los errores de proyección se continúan diseñando sendas futuras que no se explican. En el *Marco Fiscal de Mediano Plazo* se decía que, en el 2021, por el efecto del “rebote”, la economía crecería 6,6%. Esta cifra ya ha sido reconsiderada y se bajó a 5%. Y, a medida que el año vaya pasando, y esta meta tan optimista no se pueda lograr, se volverá a cambiar la proyección. El gobierno también se equivocó en sus cálculos de la caída del PIB en el 2020. El FMI estima que el PIB de Colombia cayó en el 2020 en 8,2%, muy por encima del cálculo del *Marco Fiscal*, que estimó la caída en 5,5%. A pesar de la contundencia de estas cifras, y de su excepcionalidad, el gobierno considera que basta con volver a recuperar la senda de equilibrio. Pero esta meta no será posible porque una caída tan fuerte del PIB apenas es la expresión de daños estructurales en el aparato productivo. El empresario que se quebró por la pandemia, no está en capacidad de volver a abrir el negocio inmediatamente acabe la amenaza del Covid-19.

2. Pobreza, desigualdad y focalización

Antes de que comenzara el Covid-19 la pobreza ya había aumentado. Y hay consenso en que con la pandemia el mal se agudizará. El Banco Mundial estima que en Colombia la incidencia de la pobreza extrema aumentará de 9,6% a 14,7%. Y la pobreza subirá de 35,7% a 45,%. Es

decir, casi la mitad de la población estará en una situación muy difícil. Y, además, como lo ha señalado Oxfam en su último informe, *El Virus de la Desigualdad*, es probable que junto con la pobreza también se incremente la desigualdad.

Sin duda, durante estos meses de pandemia el país ha avanzado en los programas de focalización. Se ha mejorado la metodología para identificar a los más pobres y vulnerables y, además, la logística de distribución de subsidios se ha ido consolidando. Pero los montos distribuidos continúan siendo muy bajos frente a las necesidades de los hogares. Al comparar con los países de América Latina, el gasto público dedicado a atender la pandemia continúa siendo relativamente bajo.

3. Austeridad sin keynesianismo

Aún en medio de las dificultades el gobierno continúa predicando austeridad. Las pocas cifras que se presentan en el plan de reactivación no permiten saber con precisión si se trata de nuevas inversiones, o de recursos que ya estaban asignados. De todas formas, es claro que no se está formulando un plan de choque, que sea ambicioso, y que efectivamente lleve a una transformación radical de la actividad económica. Se trata de medidas muy suaves, que no reconocen la gravedad de la situación actual, y que continúan ahogándose en una ortodoxia, que ya no tiene ninguna justificación.

El gobierno está desaprovechando la oportunidad de utilizar la capacidad de reactivación del gasto público, y se niega a buscar mecanismos que permitan financiar el mayor gasto con políticas tributarias progresivas. Las declaraciones sobre la bioeconomía y la economía circular no son posibles en medio de un discurso que añora la austeridad, y que no considera relevante la distribución de la riqueza.

Jorge Iván González

Foto tomada de: <https://www.eltiempo.com/>